

Talca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

AL INGRESO CORTE ROL 1087-2019:

VISTOS:

Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 145 y 186 del Código de Procedimiento Civil, **SE CONFIRMA** la resolución apelada de 9 de mayo de 2019, dictada en causa Rol C-865-2015, que tuvo presente la lista de testigos presentada por la demandada Sociedad de turismo y Transportes Los Culenes Limitada, sin costas del recurso.

Devuélvase.

Rol 1087-2019/Civil.

A LOS RECURSOS INGRESO CORTE 651-2020, 652-2020 Y 653-2020:

VISTOS:

En causa Rol C-868-2015 del Segundo Juzgado de Letras de San Javier, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, caratulado “Zura con Muñoz”, con fecha 31 de julio de 2019 se dictó sentencia definitiva, mediante la cual se declaró lo siguiente:

I.- Que SE RECHAZA LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTO formulada por la demandante a fojas 223.

II.- Que SE ACOGE LA TACHA deducida por la demandada a fojas 384 respecto de la testigo doña Marlene Cáceres Guzmán. Las restantes tachas son rechazadas.

III.- Que SE RECHAZA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA deducida por las demandadas.

IV.- Que ACOGE PARCIALMENTE LA DEMANDA de indemnización de perjuicios deducida por don Fernando Soto Ramírez, abogado, en representación de doña María Angélica Lezana Cortés, don Sergio Zura Cifuentes, doña Priscila y Daniela ambas Zura Lezana, en contra de don Benjamín Muñoz Romero y de Turismo y Transporte Los Culenes Limitada, representada por don Juan Carlos Muñoz Suazo, todos ya individualizados, debiendo los demandados cancelar solidariamente a título de indemnización por daño moral, las siguientes sumas: A doña María Angélica Lezana Cortés y a don Sergio Zura Cifuentes, \$20.000.000 para cada uno. A doña Priscila Ignacia Zura Lezana y a doña Daniela Constanza Zura Lezana, \$5.000.000 para cada una.

Las sumas ordenadas cancelar deberán ser reajustadas de acuerdo al índice de precios al consumidor desde que esta sentencia sea notificada a las partes.

V.- Que CADA PARTE PAGARA SUS COSTAS.”.

En contra de dicha sentencia, se alzó el demandado don Benjamín Muñoz Romero y la parte demandante, dando lugar a los ingresos civiles de esta Corte Rol N°651-2020 y 653-2020, respectivamente.

A su vez, la empresa demandada Turismo y Transportes Los Culenes Limitada, dedujo, de manera conjunta, recurso de casación en la forma y apelación, que dio origen al ingreso Rol 652-2020 Civil de esta Corte.



Por resolución de 22 de mayo de 2020, se dispuso la acumulación del referido ingreso Rol 652-2020, a la causa civil Rol 1087-2019. Asimismo, mediante sendas resoluciones de 1 de junio de 2020, se decretó la acumulación de los ingresos Rol 651-2020 y Rol 653-2020, a la señalada causa 1087-2019; procediéndose a la vista de los recursos el día 19 de enero pasado.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA CASACIÓN:

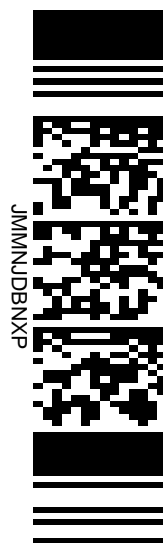
PRIMERO: Que, la parte demandada Sociedad Turismo y Transportes Los Culenes Limitada, dedujo recurso de casación en la forma en contra de la sentencia antes individualizada, fundada en la causal prevista en el artículo 768 N°5, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 N°1 y N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil, por estimar que dicho fallo no cumplió con la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio, profesión u oficio y, además, por haber omitido el análisis, apreciación y ponderación de la prueba rendida por su parte.

En apoyo de sus pretensiones, expuso respecto de la infracción al N°1 del citado artículo 170, que la sentencia recurrida no cumple con tal requisito, como queda de manifiesto en su parte resolutive, en cuanto dispone “IV.- Que ACOGE PARCIALMENTE LA DEMANDA de indemnización de perjuicios deducida por don Fernando Soto Ramírez, en representación de doña María Angélica Lezana Cortés, don Sergio Zura Cifuentes, doña Priscila y Daniela ambas Zura Lezana, en contra de don Benjamín Muñoz Romero y de Turismo y Transporte Los Culenes Limitada, representada por don Juan Carlos Muñoz Suazo, todos ya individualizados,..... (.....)”, dado que el representante legal de su defendida es don Gabriel Antonio Ibáñez Honorato, para todos los efectos legales, a quien se le emplazó a nombre de la demandada mediante exhorto E-201-2016, tramitado ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, por lo que don Juan Carlos Muñoz Suazo es un tercero extraño al juicio, sin ninguna vinculación legal con su parte.

Estima que el vicio denunciado, es inexcusable por parte de la sentenciadora, por cuanto se pretende condenar a su defendida a través de un tercero extraño ajeno al juicio de marras, quien no es su representante legal. En consecuencia, no cumplió con su deber-obligación- de designar en forma precisa a las partes litigantes, lo que produce la invalidación del fallo.

De otro lado, considera que también se ha infringido el numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia recurrida, no analiza la totalidad de las probanzas rendidas o invocadas por su parte para acreditar los fundamentos y requisitos de la excepción de responsabilidad solidaria, que esgrimió en la causa.

Aduce que en el considerando Décimo Octavo, para los efectos de rechazar tal excepción de responsabilidad, el tribunal sólo razona sobre los siguientes antecedentes probatorios:

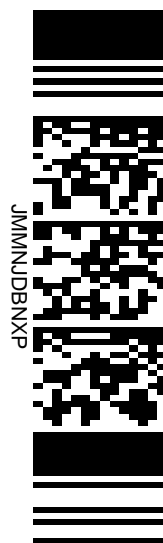


- a) Que, no resulta pertinente la prueba rendida por ella, respecto a declaración jurada del demandado–Benjamín Muñoz Romero–;
- b) Que, asimismo las planillas de cotizaciones de sus empleados–Sociedad Turismo y Transportes Los Culenes Limitada;
- c) Que, tampoco las planillas de cotizaciones de los empleados de la empresa Axioma, la cual no es parte en esta causa;
- d) Que, en cuanto al contrato de arrendamiento acompañado éste no cumple con lo dispuesto, en el inciso final del artículo 174.

Concluyendo, que “Que al respecto cabe señalar que dicha empresa no alegó ni acreditó de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Tránsito, que dicha camioneta haya sido usada contra su voluntad.”; agregando que, en mérito de lo expuesto, siendo de su propiedad la camioneta que originó el accidente sin que haya alegado ni acreditado ninguna eximente de responsabilidad de las que lo faculta la Ley, se concluye que concurre a su respecto la responsabilidad de responder por los daños causados a la parte demandante.

De esta forma, sólo en base a las referidas probanzas se concluyó que no se acreditó la eximente de responsabilidad en los términos que dispone el artículo 174 de la Ley 18.290; sin analizar el grueso de la prueba rendida por su parte y que acreditaba exactamente lo contrario. Al efecto, resalta la prueba testimonial señalando los dichos de don Roberto Bustos Bravo, Paola Labra González, Esteban San Martín Flores y Daniel Leiva Tapia; mediante los cuales, suficientemente, se logra establecer que su representada no sabía y no pudo saber, que el vehículo de su propiedad, estaba siendo usado el día del accidente fatal de marras, por un tercero extraño y ajeno a ella, en contra de su voluntad, en consecuencia viéndose en la más absoluta y total imposibilidad de haber realizado alguna acción o acto para impedirlo– nadie está obligado a lo imposible–; y en segundo término, que su defendida no tenía relación laboral alguna con el demandado principal Benjamín Muñoz Romero– tercero ajeno y extraño a ella–, como tampoco éste último estaba bajo el cuidado de ella. Argumenta que dichos testigos estuvieron contestes en los hechos y circunstancias, dieron razón de sus dichos y sin tacha legal de contrario;

Además, señaló que no se rindió prueba alguna allegada por el demandante dentro de término especial probatorio de contrario, por cuanto éste, tenía la obligación de probar, conforme al punto de prueba ordenado agregar por esta Corte de Apelaciones, los hechos y circunstancias que acrediten, de encontrarse su parte en obligación con el actor en términos del artículo 174 de la Ley 18.290 y artículos 2.314 y 2.320 y siguientes del Código Civil, tiendo en consideración que el punto de prueba, ordenado agregar por esta Corte, dispuso expresamente **“encontrarse la demandada Sociedad Transportes y Turismo los Culenes Limitada en obligación con el actor en términos del artículo 174 de la Ley 18.290 y artículos 2314 y 2320 y siguientes del Código Civil, hechos y**



circunstancias que lo acrediten, y en la negativa, hechos y circunstancias que lo acrediten .”

En cuanto, a la necesidad de ponderar racionalmente toda la prueba rendida, citó sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 1148-11 y Rol 6.747-07.

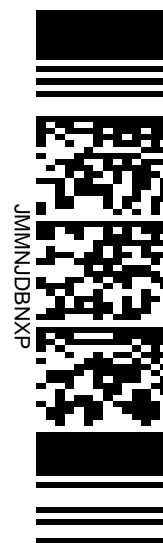
Sostuvo que el perjuicio resulta evidente pues, de haberse realizado el debido análisis, la sentencia impugnada habría arribado a una conclusión contraria a la que en ella se contiene, puesto que al tenor de la suficiente y abundante prueba testimonial allegada por su parte, sin perjuicio de la instrumental, de haberse apreciado su mérito probatorio, se habría rechazado la demanda respecto de su defendida, con costas, y no acogida como ocurrió. Así, el correcto análisis de la prueba debió, a lo menos producir las siguientes conclusiones:

- 1.- Que, del mérito de las probanzas rendidas por mi defendida, en especial, la testimonial que corre a fs. 417, 418,420 y 422, prueba legalmente producida, sin tacha legal de contrario, o impugnación legal pendiente, ella reviste-testimonios-mérito suficiente, para tener por acreditada la eximente de responsabilidad alegada por ella.
- 2.- Que, dicha probanza antes expresada, lo ha sido de conformidad al punto de prueba ordenado agregar por esta Corte, en su oportunidad.
- 3.- Que, asimismo, no existiendo prueba en contrario producida por la demandante, resulta aún más plausible acoger la eximente de responsabilidad alegada por mí defendida.
- 4.- Que, entonces en mérito de lo antes expuesto, se debe rechazar en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios intentada en contra de mí defendida con expresa condenación en costas.

Concluyó solicitando que se invalide el fallo impugnado y, acto continuo y sin nueva vista, se proceda a dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la Ley la que necesariamente deberá rechazar en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios en contra de su parte, por concurrir, existir y haberse acreditado suficientemente por ésta la eximente de responsabilidad -solidaridad- alegada por ella, no existiendo prueba en contrario, con expresa condenación en costas al demandante en ambas instancias.

SEGUNDO: Que, en lo que concierne al primer capítulo de la causal de nulidad invocada, cabe tener en consideración que son hechos de la causa los siguientes:

- 1.- En libelo de autos, agregado a folio 3, de 21 de diciembre de 2015, se indicó como representante legal de la sociedad demandada a don Juan Carlos Muñoz Suazo.



2.- Mediante escrito de folio 1, de misma fecha que la demanda, el apoderado del actor, la rectificó señalando que el representante legal de la empresa Turismo y Transporte Los Culenes Limitada, era don Gabriel Ibáñez Honorato.

3.- En la parte expositiva del fallo impugnado se reprodujo la demanda impetrada en autos, con la mención que originalmente se hizo del representante legal de la referida demandada, esto es, don Juan Carlos Muñoz Suazo; y lo mismo se indicó en lo resolutivo, al individualizar al representante de la empresa Turismo y Transporte Los Culenes Limitada.

TERCERO: Que, conforme a lo prevenido en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, para que proceda el recurso de casación, es preciso que quede de manifiesto que el recurrente haya sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o que el vicio haya influido en lo dispositivo del mismo.

En la especie, si bien resulta evidente la existencia de un error al individualizar al representante legal de la empresa demandada y recurrente de casación, lo cierto es que esa sola circunstancia no implica una falta de individualización de la esa parte litigante, dado que no hay duda de que quien resultó condenada es la Sociedad Turismo y Transporte Los Culenes Limitada, por lo que el error que se representa carece de la trascendencia que exige la norma y, además, no es reparable únicamente con la invalidación del fallo, por lo que procede desestimar la causal de casación en estudio.

CUARTO: Que, en lo que concierne a la segunda infracción que se reprocha, esto es, lo previsto en el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, basado en una falta de ponderación de todos los elementos probatorios presentados por el recurrente, cabe tener en consideración que, en lo que interesa al recurso, la defensa de la empresa demandada se sustentó en que tenía total desconocimiento que el demandado conducía el vehículo de su propiedad, sin su autorización y conocimiento o anuencia, sumado a que este último ha reconocido que no tiene y no ha tenido vínculo laboral o civil con dicha sociedad, lo que la exime de la responsabilidad que se le atribuye, puesto que sólo se enteró del accidente con la notificación de la demanda.

Para acreditar tales asertos, rindió las probanzas especificadas en el motivo noveno del fallo objetado, girando en torno a un contrato de arriendo celebrado el 30 de mayo de 2012, entre la sociedad demandada y la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., respecto del vehículo PPU BSRB-47-1, y que el demandado don Benjamín Muñoz Romero, en su calidad de conductor del mismo, no trabaja para ninguna de esas sociedades. En ese sentido se acompañaron las planillas de pago de cotizaciones de cada una de dichas empresas; declaración jurada del referido demandado y los testimonios de don Roberto Bustos Bravo, doña Paola Labra González, don Esteban San Martín Flores y don Daniel Leiva Tapia.



Consta del motivo décimo octavo que el tribunal rechazó tales alegaciones por estimar que la prueba rendida fue insuficiente para establecer las eximentes de responsabilidad contempladas en el artículo 174 de la Ley de Tránsito, en orden a que no se acreditó que se hubiese usado contra la voluntad del dueño y porque el contrato de arriendo no fue con opción de compra e irrevocable, y no se inscribió en el Registro de Vehículos Motorizados con anterioridad del accidente, como exige la referida disposición.

QUINTO: Que, este contexto, es dable concluir que resolvió conforme al mérito del proceso y normativa aplicable al caso, lo que hacía innecesario el análisis de la prueba testimonial presentada por la empresa demandada en estos aspectos. De esta forma, resulta evidente que lo que en realidad se cuestiona, es la interpretación jurídica efectuada por el juez a quo respecto de la procedencia de las eximentes establecidas en el citado artículo 174, de lo cual no corresponde pronunciarse por la vía de la casación en la forma por tratarse de una norma decisoria litis. En consecuencia, también corresponde desestimar la causal de nulidad contemplada en el artículo 768 N°5 en relación con el artículo 170 N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil y concluir que la sentencia impugnada no es nula.

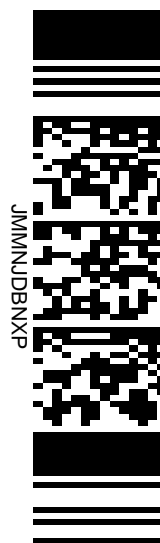
Por las anteriores consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto, además, en los artículos 768, 769 y 784 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en la forma, impetrado en autos.

II.- EN CUANTO A LAS APELACIONES DEDUCIDAS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Se reproduce la sentencia apelada, de 31 de julio de 2019, con excepción de sus fundamentos vigésimo y párrafo final del vigésimo tercero, que se inicia con la frase “En cuanto...” y concluye con la voz “precedentemente.”, que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, EN CONSIDERACIÓN:

SEXTO: Que, en armonía con los razonamientos efectuados respecto del recurso de casación, en cuanto a la correcta aplicación efectuada por el juez de la instancia respecto del artículo 174 de la Ley de Tránsito, resulta innecesario pronunciarse sobre la testimonial presentada por la empresa demandada, puesto que sólo atiende a reafirmar la existencia de un contrato de arrendamiento respecto del vehículo que causó el accidente y la falta de conocimiento y autorización de Benjamín Muñoz Romero para uso. Sin perjuicio que nadie explicó el por qué lo utilizó, cómo se hizo de las llaves y menos aún que hubiesen denunciado un posible hurto, ya que los testigos Roberto Bustos, Paola Labra y Esteban San Martín, afirman que hubo un mal uso de la camioneta, que le había sido asignada a un tercero de nombre Juan Carlos Muñoz, para ser usada en Santiago y que Muñoz Romero no trabaja para la empresa Axioma ni para la sociedad dueña del vehículo. Por último, el testigo Daniel Leiva Tapia, sólo se



refiere al enojo y dichos de un tercero, de nombre Gabriel Ibáñez, el que se debería a las mismas razones antes referidas.

SÉPTIMO: Que, previo a valorar la prueba rendida por los demandados para establecer su alegación en orden a que existió una exposición imprudente al daño por parte de la víctima, cabe tener en consideración, que como se indicara en el fundamento decimocuarto del fallo en alzada, en causa RIT 1620-2014 del Juzgado de Garantía de San Javier, el día 28 de abril de 2015 se dictó sentencia en procedimiento simplificado, en la que el demandado don Benjamín Muñoz Romero fue condenado en calidad de autor del cuasidelito de homicidio y lesiones en grado de consumado, perpetrado en dicha comuna el 29 de junio de 2014, a sufrir la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de licencia de conducir por el plazo de un año, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena.

Dicha sentencia se encuentra ejecutoriada y se sustentó en los hechos de la acusación y requerimiento en procedimiento simplificado por el Ministerio Público, que fueron aceptados expresamente por el enjuiciado Muñoz Romero y que consisten en los siguientes:

“Que, con fecha 29 de junio de 2014, a las 5:15 horas, el imputado Pedro Antonio Acuña González conducía bajo la influencia del alcohol (0,40 grs/1000 en la sangre) el automóvil marca Nissan modelo Sunny año 1998 color verde PPU BJ-9207, por la primera pista de circulación de la calzada poniente sur de la ruta 5 sur, en dirección al sur, en esas circunstancias y mientras en la carretera existía densa neblina fue colisionado en la parte posterior del automóvil por la camioneta marca Great Wall modelo Deer año 2009, color blanco PPU BSRB-47, conducida por el imputado Benjamín Muñoz Romero, quien conducía el automóvil no atento a las condiciones del tránsito del momento, percatándose tardíamente de la presencia y proximidad del móvil conducido por Acuña que le antecedió en la vía y a menor velocidad colisionándolo por alcance y por proyección el automóvil Nissan se vuelca.

Producto de lo anterior, resultó fallecida la copiloto del móvil conducido por Acuña doña Araceli Zura Lezana y lesionados CONSTANZA MELLADO TAPIA, resultó con fractura de hueso iliaco de carácter grave; PEDRO ANTONIO ACUÑA GONZALEZ quien resultó con fractura de costilla 6 y 7 hemitorax derecho de carácter menos grave y EDUARDO HUMBERTO ORELLANA CACERES, con fractura de costilla 4, 5, 6 hemitorax derecho de carácter menos grave”.

De esta forma y en virtud de lo dispuesto en los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, reproducidos en el motivo décimo quinto de la sentencia en estudio, no resulta lícito tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirven de necesario fundamento.



En consecuencia, en lo que interesa a la alegación deducida por la demandada, cualquier alegación que se oponga a tales circunstancias fácticas como una presunta ebriedad o responsabilidad del conductor Acuña González, es incompatible con dicha sentencia. Además, se dejó expresamente establecido que la víctima Aracelli Zura Lezana iba de copiloto en el móvil conducido por Acuña, por lo que tampoco es posible cuestionar tal circunstancia ni dar lugar a pruebas en sentido diverso.

OCTAVO: Que, en este contexto legal y fáctico, no es posible dar valor probatorio a los dichos de los testigos presentados por el demandado Muñoz Romero, señores Diego Suazo Opazo, Luis Muñoz Lobos y Yerko Yáñez Mejías, en cuanto cuestionan la causa basal del accidente, atribuyen un estado de ebriedad manifiesto al conductor Acuña González y en cuanto los dos primeros afirmaron que el copiloto era de sexo masculino, puesto que se contrapone a los hechos que se dieron por establecidos en la sentencia penal referida en el motivo anterior.

De esta forma, sus testimonios carecen de la rigurosidad necesaria y no es posible considerarlos como verosímiles, por contraponerse con lo sentado en un proceso penal afinado, de manera que carecen de valor probatorio en esta causa.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar, que dichos testigos ni siquiera son concordantes entre sí en los aspectos esenciales, puesto que Suazo Opazo afirmó que estuvo presente cuando sacaron al conductor del vehículo siniestrado y respondió que lo retiraron, lo subieron a la camilla, lo revisaron y no tenía mayores dolores; que “claramente estuvo de pie” y que por seguridad lo revisaron para que estuviera todo bien. En tanto que don Luis Muñoz Lobos, aseveró que junto con los voluntarios de bomberos Jorge Carrasco y José Manuel Muñoz, sacaron a dicho conductor del vehículo, bajando el vidrio de la ventana dado que las puertas no se podían abrir ya que estaban atrapadas con el barro; respondiendo que aquél estaba un poco apretado entre el manubrio y el asiento. También contestó que el agua casi le llegaba a la boca por lo que tenía que sostenerle la cabeza para que no se ahogara y que “en ningún momento el chofer del auto estuvo de pie”. Por último, Yáñez Mejías indicó que según lo que vio las personas podrían haber salido perfectamente por sus propios medios del vehículo sin ayuda, de haber estado en normal estado, (refiriéndose a una supuesta ebriedad); en circunstancias que ello es contradictorio con la naturaleza de las lesiones sufridas por los sobrevivientes que estaban en el referido móvil y con lo señalado por el testigo Muñoz Lobos en orden a que el agua le llegaba a la cabeza al conductor y las puertas estaban atrapadas por el barro.

De igual forma carece de fuerza probatoria el documento acompañado por la defensa de Muñoz Romero, titulado “Informe Pericial Criminalístico”, que aparece extendido por Oscar Águila Galdámez, por cuanto se trata de un documento privado que emana de un tercero ajeno al juicio que no compareció a estrados a ratificar su contenido y dar cuenta de lo allí consignado. Además, por



su medio se cuestionan los hechos establecidos en sentencia penal ejecutoriada, lo que resulta improcedente a la luz de lo preceptuado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil.

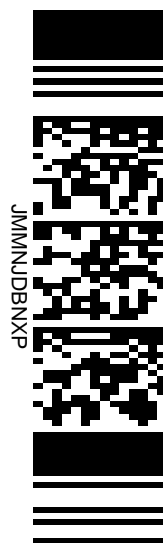
NOVENO: Que, de acuerdo a los hechos fundantes de la sentencia dictada en causa RIT 1620-2014 del Juzgado de Garantía de San Javier, reconocidos expresamente por el condenado en dicha causa y demandado de autos, don Benjamín Muñoz Romero, queda de manifiesto que ninguna relevancia tiene en la comisión del hecho punible de que aquél es responsable, la circunstancia que el conductor del otro móvil haya manejado bajo la influencia del alcohol, puesto que la colisión se produjo por alcance, debido a que Muñoz Romero no estaba atento a las condiciones de tránsito del momento, debido a una intensa neblina que hacía necesario reducir la velocidad, como lo hizo por precaución el auto que lo antecedía, que fue impactado por atrás y se volcó por proyección, cayendo a una zanja, como claramente lo estableció la SIAT de Carabineros en su informe pericial, agregado a folio 140.

En consecuencia, resulta inadmisibles la imputación efectuada por la parte demandada a la víctima, de haberse expuesto imprudentemente al daño por haber decidido regresar a su domicilio en el vehículo conducido por Acuña González, atribuyéndole una ebriedad inexistente a éste y cuestionando la temperancia alcohólica de aquélla; además, tampoco hay antecedente de prueba que permita establecer de manera inequívoca que ella no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que procede su rechazo.

DÉCIMO: Que, en lo que concierne al perjuicio no patrimonial demandado, esta Corte concuerda con la juez a quo en orden a que corresponde ser indemnizado y que fue suficientemente acreditado, con el mérito de las probanzas rendidas y analizadas en el motivo vigésimo tercero, en la parte que se mantuvo.

En efecto, corresponde resarcir a los demandantes del daño causado con la muerte de Aracelly Zura Lezana, hija y hermana de los demandantes, teniendo en consideración que se produjo de manera absolutamente inesperada y violenta, debido al accidente automovilístico causado por el actuar negligente y descuidado del demandado Benjamín Muñoz Romero, cuando ella tenía tan sólo 23 años, lo que sin lugar a dudas generó una profunda aflicción a su familia que, en la especie, se evidenció con la prueba documental y testimonial rendida en la causa por la parte demandante, reseñada en el fundamento séptimo del fallo en alzada, teniendo especialmente en cuenta respecto de esta última, que se trató de los dichos de 3 testigos que declararon de manera concordante y estuvieron contestes en señalar tal aflicción.

Sin embargo, al parecer de estos sentenciadores, se debe efectuar una diferenciación entre el perjuicio sufrido por los padres y las hermanas de la víctima, puesto que constituye una máxima de la experiencia que el dolor sufrido

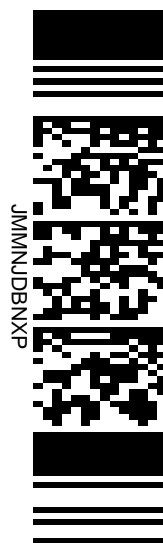


por la pérdida de un hijo no es comparable con ningún otro, la que se encuentra refrendada con la prueba rendida en el juicio, por ende, no es posible sostener que hay una equivalencia con la aflicción sufrida por las hermanas, de 20 y 14 años a la época de los hechos. En efecto, los propios testigos de la parte demandante si bien corroboran la existencia de un profundo dolor en la familia por la muerte de Aracelly de manera tan trágica, hacen una diferencia. Así, doña Gemita Ferrada Lagos, aseveró que la familia completa quedó destruida psicológicamente con la muerte de Aracelly, ya que antes eran muy alegres; resaltó que después que ella dejó este mundo, sus padres andaban siempre tristes y que cada vez que conversó con ellos se ponían a llorar, hablaban mucho de su falta, que se les había ido su primera hija y el dolor lo iban a tener por siempre. Por su parte, doña Sara Espinoza Anabalón, señaló que ha compartido con los padres de Aracelly y sus hermanas Daniela y Priscila; habla principalmente con la madre ya que el padre evade el tema; ella le ha comentado como ha tenido que lidiar con esto, sus crisis, lo que ha significado las fiestas de fin de año y sus cumpleaños; además, refirió que ha tenido la oportunidad de acompañarla en todos los aniversarios de la muerte de Aracelly. Los momentos que ha estado con ellos ha sido de harta tristeza y afirmó que la madre y su familia han sufrido un daño irreparable. Por último, especialmente relevante fue el testimonio de la psicóloga doña Carol González Escobar, desde que expuso que fueron pacientes suyos don Sergio Zura y doña María Lezana, ingresados al programa de salud mental; doña María sufría una depresión moderada, con alto riesgo, angustia y tristeza, sin ganas de vivir, debió ser sometida a tratamiento farmacológico y derivada a psiquiatría en Linares; en tanto que a don Sergio no se le dio ese tratamiento médico debido a que por mucho tiempo estuvo con negación y no quiere hablar de la situación; en su caso, el doctor le diagnosticó un duelo patológico, ha tenido sesiones, pero más esporádicas. También refirió que los hechos afectaron el entorno familiar, fue una crisis ya que tenían más hijos, la madre no estaba bien y el padre expresaba rabia, enojo y negación por lo sucedido.

De otro lado, a objeto de regular prudencialmente el daño moral cuya indemnización se solicita, se ha tenido también en consideración que la víctima residía con sus padres y hermanas.

Conforme a lo antes razonado, teniendo en cuenta la profunda aflicción causada al grupo familiar por la pérdida de una hija y hermana, se hará lugar a lo pedido en un monto mayor que lo regulado por la juez a quo, dado que se desestimó la pretensión de los demandados de rebajar la indemnización, regulándola prudencialmente en la suma de \$30.000.000, para cada uno de los padres y en la suma de \$10.000.000, para cada una de las hermanas demandantes.

UNDÉCIMO: Que, para los efectos de mantener el valor adquisitivo de la suma que se dispondrá pagar por concepto de indemnización, deberá reajustarse



conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, entre el mes anterior al que esta sentencia quede ejecutoriada y el que preceda al de su pago efectivo.

DUODÉCIMO: Que, en nada altera lo concluido por el juez de primer grado y reiterado por esta corte, el documento acompañado por la parte demandante, consistente en el mérito del Parte Policial N°271 de 25 de junio de 2014, en el que consta que don Benjamín Muñoz Romero, fue infraccionado por Carabineros por conducir a exceso de velocidad ese día en la comuna de Villa Alegre, la camioneta marca Great Wall, modelo Deer, año 2009, P.P.U. BSRB-47, de propiedad de la sociedad demandada Turismo y Transporte Los Culenes Ltda., dado que se desestimaron las alegaciones efectuadas por esta última.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1698 del Código Civil; 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que SE REVOCA, la sentencia definitiva dictada el 31 de julio de 2019, en causa Rol C-1238-2016 del Juzgado de Letras de San Javier, en cuanto acogió parcialmente la demanda deducida en autos y dispuso que cada parte pagaría sus costas y, en su lugar, se dispone:

A.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el abogado don Fernando Soto Ramírez, en representación de doña María Angélica Lezana Cortés, don Sergio Zura Cifuentes, y de Priscila y Daniela, ambas Zura Lezana, en contra de don Benjamín Muñoz Romero y de la sociedad Turismo y Transporte Los Culenes Limitada, representada por don Gabriel Antonio Ibáñez Honorato, ya individualizados, en cuanto se condena a estos últimos a pagar solidariamente a los actores, por concepto de daño moral, las sumas siguientes: a doña María Angélica Lezana Cortés y a don Sergio Zura Cifuentes, \$30.000.000 para cada uno de ellos; y a cada una de sus hijas Priscila Ignacia y Daniela Constanza, la suma de \$10.000.000; reajustadas todas esas sumas, en la forma dispuesta en el considerando undécimo del presente fallo.

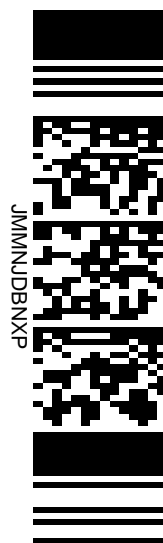
B.- Que se condena a los demandados al pago de las costas del juicio y del recurso.

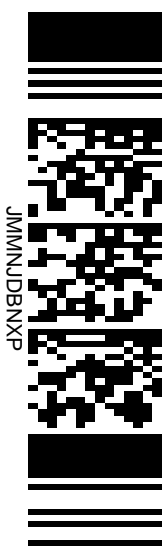
II. Que, SE CONFIRMA, en lo demás apelado, la referida sentencia definitiva de 31 de julio de 2019.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad, con sus agregados.

Redacción de la Ministra titular doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol 651-2020, 652-2020 y 653-2020/Civil, acumuladas a la causa Rol N°1087-2019/Civil





JMMNUDBNXP

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Presidente Jeannette Scarlett Valdés S., Ministro Moises Olivero Muñoz C. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

En Talca, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

